

---

## Instantáneas

# Democracia, política y representación

---

### I

La primavera de 1983 quedará grabada para siempre en la memoria de varias generaciones de argentinos. Por aquel entonces, tras la experiencia de la última dictadura militar, la sociedad parecía refundarse a partir de un nuevo principio: el del *gobierno del pueblo*, el de la democracia o, en lenguaje de época, el de una “democracia sin adjetivos”. Aquella naciente democracia parecía erigirse como garante y depositaria de las más variadas expectativas sociales: “Con la democracia se come, se cura y se educa” recitaba la enérgica y promisoriosa voz de Raúl Alfonsín, haciéndose eco de una esperanza colectiva, algo exagerada, tal vez, pero no por eso menos genuina.

Quizás por la gravitación que había alcanzado en la arena política el recientemente conformado movimiento de derechos humanos, quizás como respuesta a las expectativas de una sociedad que si durante los años más oscuros del terror estatal había mirado hacia un costado ahora constataba con horror e indignación la masividad de los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención, o quizás también porque formaba parte del programa transicional del alfonsinismo, lo cierto es que los primeros meses del flamante gobierno electo aquel histórico 30 de octubre fueron de una intensa actividad en materia de derechos humanos. Que la fecha de la asunción presidencial (10 de diciembre) coincidiera con el Día Internacional de los Derechos Humanos no hacía más que otorgarle una fuerza simbólica inigualable a aquello que comenzaba a percibirse como un mandato de reconstrucción ética y política.

Si hay una escena emblemática de aquella voluntad de reconstrucción es, sin lugar a dudas, el Juicio a las Juntas Militares (abril-diciembre de 1985). Su excepcionalidad —único caso en la historia en que la justicia civil de una nación juzgaba a sus propios tiranos por los crímenes cometidos— situaba a la Argentina en el lugar de avanzada en materia de justicia transicional. Pero quizás más importante aún era la fotografía que aquella escena ofrecía, una fotografía que, en definitiva, evidenciaba la inversión de poder que *el gobierno del pueblo* traía consigo. Quienes durante siete años habían sido los jefes de la vida y de la muerte comparecían ahora ante la justicia; y, desde el banquillo de los acusados, escuchaban y obedecían la orden impartida a diario por un ignoto secretario de juzgado ante la entrada de los jueces a la sala: “Señores, de pie”. Y fue, también, desde el banquillo de los acusados que debieron escuchar el aplauso estridente y sin fin que siguió a las últimas palabras del alegato del fiscal Julio César Strassera: “Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: *Nunca más*”.

Ese *Nunca más* era, efectivamente, expresión de una voluntad colectiva de cerrar para siempre el largo capítulo de sangre y plomo de la historia reciente argentina. Y esa voluntad habría de manifestarse con masiva contundencia en las plazas de todo el país, apenas un año y medio después, cuando la Semana Santa de 1987 se vio empañada por el primero de una serie de levantamientos “carapintada”. Por años, fue esa la última manifestación masiva de un pueblo confiado en el poder de su movilización. La capitulación de los rebeldes ocultaba mal su secreta victoria: un prometido fin de los procesos judiciales por los delitos de antaño. La decepción que aquel domingo 19 de abril se adueñó de las columnas humanas que abandonaban las plazas sería el preludio de una nueva y distinta etapa. La primavera alfonsinista llegaba a su fin.

En materia de derechos humanos el período que se abrió entonces estuvo signado por una sucesión de medidas (Ley de Obediencia Debida, 4 de junio de 1987; Indultos presiden-



ciales, 7 de octubre de 1989 y 30 de diciembre de 1990) que, para ofensa de la conciencia humana, intentaban sellar con fuerza de ley la impunidad de los más atroces crímenes cometidos en la Argentina.

Esta vez, las mayorías se mantuvieron bastante más ajenas; incluso quienes por principio o por reflejo echaron mano a la protesta lo hicieron bajo la oscura convicción de que la batalla estaba perdida de antemano. Pero si el problema de las violaciones a los derechos humanos quedaba relegado, ello se debía, probablemente, menos al cansancio que a la constatación cotidiana de que con la democracia “sin adjetivos” no alcanzaba para comer, ni para curar, ni para educar. Allí radicaba —y a treinta años aún radica— una de las más corrosivas promesas incumplidas de la democracia naciente en 1983.

La larga década que comenzaba en 1989 estuvo signada, en el plano internacional, por el derrumbe del “socialismo real” —que dejaba huérfana de faro y sentido a buena parte de las izquierdas—, por el repliegue del estado benefactor y por cambios profundos en el modo de acumulación capitalista, cambios que no sólo arrojaban a millones de personas en el mundo entero a la oscuridad del desempleo sino que, además, aumentaba la brecha de la desigualdad en proporciones hasta entonces inimaginadas. El neoliberalismo comenzaba, así, su período de esplendor.

En la Argentina, el gobierno de Alfonsín se consumía en una crisis económica que habría de quedar congelada en la memoria colectiva a través de las imágenes del espectáculo televisado de los saqueos a supermercados. Ese fue el terreno fecundo para que las promesas de “revolución productiva” y “salariazó” de un histórico líder del peronismo riojano encandilaran la conciencia de las mayorías. Así, Carlos Menem llegaba al poder gracias al voto popular.

Muy pronto, este segundo gobierno constitucional, en sentido exactamente opuesto al de sus promesas electorales, optaría por el rumbo de un liberalismo despiadado y corrupto: “achicamiento” del Estado y reducción del gasto público, privatizaciones de empresas y servicios y una “flexibilización laboral” que, en rigor, consistió, sin mayores eufemismos, en la anulación y pérdida de los derechos que los trabajadores habían logrado conquistar a lo largo del siglo. Si la propia dictadura militar no había logrado llegar tan lejos, Menem lo hizo.

Al promediar la gestión menemista, la recesión económica, la desocupación y la pobreza alcanzaron niveles sin precedentes hasta entonces en la historia argentina. Y, sin embargo, el voto de las mayorías volvió a acompañar al líder peronista —que, dicho sea de paso, había sabido aglutinar en torno a su figura a la amplia red de representantes del justicialismo de todo el país— en un segundo mandato que no hizo más que extender y profundizar las secuelas del primero.

El después fue apenas una débil y fugaz expectativa (la Alianza o, en rigor, el FREPASO) seguida por la ineptitud e inoperancia de un gobierno, el de Fernando de la Rúa, que poco y nada quiso hacer para torcer los lineamientos que desde 1989 se habían diseñado y cuyas consecuencias parecían ya irreversibles. Esta larga cadena de desatinos y frustraciones no sólo arrojó a millones de hombres y mujeres a las tinieblas de la miseria, sino que, además, alimentó de escepticismo y desconfianza a las más variadas formas de representación de *lo político*. Se fue nutriendo, así, un sentido común según el cual la política es equivalente a la corrupción, a la inoperancia, a la mácula.

Esa desconfianza radical quedó expresada en una consigna imposible que, habiéndose gestado silenciosamente por no pocos circuitos subalternos, emergió con fuerza durante la que quizás sea la crisis más grave de la democracia argentina, la de diciembre de 2001: *que se vayan todos*.

Sin embargo, por debajo de ese grito de hastío de las puebladas, se fueron reconstruyendo lazos sociales, solidarios, y, muy pronto, la política volvió a ser una herramienta de intervención sobre el mundo. En esa suerte de regreso de la política, emergieron nuevas formas de prácticas democráticas, como las asambleas y los movimientos sociales auto-organizados y, también, viejas modalidades represivas que incluyeron el asesinato a sangre fría de militantes populares como Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (26 de junio de 2002).

Si es difícil ponderar el grado de entusiasmo o esperanza con que *las mayorías* concurrieron a las urnas el 27 de abril de 2003, menos difícil parece afirmar que, a partir de enton-

ces, se abrió una nueva etapa, la kirchnerista, que, con vaivenes y resistencias, dio lugar a una democratización política, social y económica, quizás algo tibia, incompleta o insuficiente para muchos, pero no por eso desdeñable.

En materia política, el kirchnerismo ha sabido enhebrar identidades y voluntades dispersas en torno a un “proyecto” que funciona no sólo como movilizador de una renovada práctica militante sino también como espacio simbólico de identificación y pertenencia. En el terreno de los derechos humanos el kirchnerismo ha llevado adelante una política que es mucho más que un conjunto de “gestos de gran valor simbólico”. No sólo ha pedido perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos y las impunidades que les siguieron, no sólo ha desterrado del panteón de las paredes del Colegio Militar los retratos de los comandantes del terror, también —si no sobre todo— ha impulsado, junto a otros actores políticos, la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (21 de agosto de 2003) —declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2005— lo cual permitió la reapertura de causas judiciales que habían quedado truncas a fines de los años ochenta y el inicio de otras nuevas.

En materia económica, la implantación de un paquete de medidas más o menos keynesianas y de una política redistributiva y subsidiaria ha favorecido la reactivación económica y el ensanchamiento del mercado interno. En cuanto a la dimensión social de este impulso democratizador, el kirchnerismo ha hecho posible una legislación inclusiva en la que se destacan decretos y leyes que van desde la Asignación Universal por Hijo/a a la Ley de Identidad de Género.

La contracara de estos fenómenos —sin dudas celebrables— ha sido la cooptación de movimientos y organizaciones sociales cuyo valor político y fuerza simbólica radicaba, precisamente, en su autonomía; una retórica y una concepción intolerante de la disidencia, tributaria de los aspectos menos reivindicables de la militancia setentista; la permanencia de una alianza entre Estado, empresas y burocracia sindical, alianza que se puso en evidencia tanto en el asesinato de Mariano Ferreyra (20 de octubre de 2010) como en la tragedia de Once (22 de febrero de 2012) que se cobró la vida de 51 personas; la falta de respuestas hacia algunas demandas históricas impulsadas por el movimiento feminista como las de garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos y el aborto legal; la persistencia de la vinculación estrecha del Estado y la Iglesia católica, ahora envalentonada tras la elección de Jorge Bergoglio como papa; los pesados lastres asociados al rumbo de desarrollo elegido —vinculados a lo que algunos han denominado “modelo extractivista”— que de modo muy poco imaginativo ha soldado el crecimiento económico al boom de las *commodities* y a estrategias de escasa sustentabilidad, cuando no directamente devastadoras de ecosistemas y territorios; y, ligado a ello, un fenómeno reciente y tenebroso: el de la extensión de una economía política del narcotráfico que, en complicidad con actores políticos e institucionales, en algunas zonas del país (como por ejemplo Rosario o segmentos del conurbano bonaerense) amenaza desatar una “guerra de baja intensidad” cuyas principales víctimas vuelven a ser los estratos populares.

A condición de no olvidar, como queda dicho, que fueron los sectores más desfavorecidos los que pagaron los gravosos costos sociales de estos treinta años de democracia, este 10 de diciembre de 2013 será un motivo de celebración colectiva. Quizás la celebración de los treinta años de democracia ininterrumpida sea también una buena ocasión para actualizar sus promesas incumplidas. En el plano de las urgencias se destacan aquellas que, de una u otra manera, involucran tanto a la vida humana como a la propia esencia del sistema democrático.

En primer lugar, la deuda mayor de esta democracia remite al mundo siempre oscuro de la pobreza y la desigualdad. Y no se trata sólo de un problema *ético*; se trata, también —si no sobre todo—, de un problema *político*: al decir de Hannah Arendt, no puede haber libertad política allí donde los cuerpos están sometidos al imperio de la necesidad.

En segundo lugar, las deudas de estos 30 años apuntan a la violencia institucional. La desaparición de Jorge Julio López (18 de septiembre de 2006), el asesinato de Carlos Fuentealba (4 de abril de 2007) y la desaparición de Luciano Arruga (el 31 de enero de 2009) son tan sólo exponentes dramáticos de prácticas institucionales que el estado democrático no ha

logrado aún erradicar; prácticas que incluyen violencias menos espectaculares, violencias cotidianas e invisibilizadas como la represión del mundo de la pobreza, la complicidad política y policial con las redes de explotación sexual o la tortura a presos comunes.

En una dimensión quizás menos tangible, el balance de estos 30 años no puede esquivar el problema de las responsabilidades políticas en las derivas y naufragios de buena parte de las esperanzas colectivas de aquella primavera de 1983. Algunas de esas responsabilidades recaen, qué duda cabe, sobre la mal llamada clase política, allí donde sus determinaciones, defecciones, cobardías o inoperancias, participaron directamente de las crisis y frustraciones antes mencionadas.

También le cabe en este balance su cuota de responsabilidad a las diversas expresiones que remiten a la tradición de las izquierdas, allí donde no fueron capaces de contagiar su voluntad emancipatoria, allí donde no han sabido convocar y articular a los diseminados — aunque no escasos— anhelos de transformación social.

Según el dicho popular, cada pueblo tiene los mandatarios que se merece. Si quisiéramos, a la manera gramsciana, aprehender el núcleo de verdad contenido en esta formulación ideológica condensada, podríamos reconocer en el pueblo argentino de estos últimos treinta años momentos de extravío y de lucha, de euforia o de indiferencia, de esperanza y de decepción; situaciones de resistencia e incluso de explosión colectiva, y, al mismo tiempo, otras signadas por la mera delegación; ya sea encandilado por una ilusión democrática, consumista o populista.

Cada vertiente política apelará, dentro de este heteróclito conjunto, a anclar su política sobre los momentos que considere dignos de ser afianzados y desplegados. Las derechas, con su retórica de la seguridad, el libre comercio y el Estado chico, interpelan al individuo posesivo, miembro de la muchedumbre consumista de los años '90. Los populismos apelan a la memoria de las masas peronistas reconocidas con el Estado que las incluyó dentro de la Patria Justa, Libre y Soberana. En este momento de balance, los editores de **Políticas de la Memoria** abogamos por una izquierda capaz de anclar en lo que consideramos es lo mejor de las tradiciones populares argentinas: su capacidad de auto-organización social frente a la desigualdad, la injusticia o el poder represivo, su creatividad para inventar y reinventar formas colectivas de organización, desde las mutuales y los gremios, los movimientos de mujeres, de estudiantes, de arrendatarios de hace un siglo, hasta las nuevas formas de solidaridad colectiva que vimos emerger a fines de los '90 e inicios del nuevo siglo, pasando por la creación de los organismos de derechos humanos en la segunda mitad de los '70, verdadero parto de nuestra desamparada sociedad civil en el momento más dramático de nuestra historia. Aunque no ignoramos que estas formas de organización social han generado sus propias jerarquías, sus inercias y sus burocracias, en su momento constituyente introdujeron lógicas de la solidaridad social contra las lógicas competitivas del mercado, prácticas de horizontalidad política frente a la distancia que separaba a la sociedad del Estado, luchas por la defensa del bien común ante la expansión privatista de la mercantilización. Lo mejor de las izquierdas del siglo XX ha contribuido a crear y sostener en la práctica estos espacios, ha contribuido a pensarlos, a menudo le ha legado sus dirigentes y, a la recíproca, muchos militantes de las organizaciones sociales se han integrado en las filas de las izquierdas. En buena medida, el esfuerzo de nuestra revista está destinado a pensar los modos en que históricamente se tejieron y se destejieron estas complejas relaciones entre las izquierdas y las diversas formas de auto-organización social.

## II

En la presentación del número anterior de **Políticas de la Memoria** Maristella Svampa comenzó su intervención con una pregunta que no fue retomada en el debate posterior. En el marco de su comentario a la encuesta sobre Peronismo y Cultura de Izquierdas, ella se preguntaba por qué entre quienes respondieron había una sola mujer. Retomamos ese interrogante, no para contestar a Svampa sino para explorar los alcances y los límites de la pregunta que, con acierto, arrojó a la mesa esa tarde.

La invitación a la encuesta fue amplia y en el grupo editor se hizo explícita la preocupación por convocar tanto a varones como a mujeres. El problema comenzó cuando notamos que en la lista preliminar había pocos nombres femeninos. De todos modos, se invitó a varias mujeres cuyos intereses y preocupaciones se relacionaban con estas temáticas. Sin embargo, sólo llegó una respuesta, la de Beatriz Sarlo. Sin contar con las intenciones (o las omisiones) del grupo editor y, más allá de las razones personales de tiempos y obligaciones de las invitadas ¿esta ausencia nos dice algo más?

Un Bourdieu con sensibilidad de género podría afirmar que en ese campo de coordenadas inestables habitado por intelectuales cercanos a algún tipo de militancia de izquierda y/o popular, y militantes dados a la reflexión política (más o menos ese era el recorte de los encuestados), podría constatarse una menor presencia de las mujeres, así como se constata en cualquier congreso de ciencias sociales y humanas que, pese a la fuerte feminización del campo, en las mesas dedicadas a la teoría predominan los varones. Esta menor participación de las mujeres en la reflexión intelectual sobre la política contemporánea puede ser difícil de medir con rigurosidad, pero se hace bastante evidente sólo con recorrer los nombres de las columnas de opinión de los principales diarios, y con repasar las firmas de los más recientes libros de intervención política.

Es esta una respuesta posible, sin embargo, si en la encuesta hubiera habido exactamente la misma cantidad de hombres que de mujeres ¿la cuestión de la relación entre el género y la política estaría resuelta? Claramente no. Sin desechar la herramienta del cupo femenino—que en la política partidaria y en los espacios institucionales ha tenido un impacto innegable— es todavía necesario repetir que el acceso a esos espacios por parte de mujeres no garantiza una mejor política ni, siquiera, una política orientada a los derechos de las mujeres o a los objetivos históricos del feminismo.

Pero hay algo más, la aparente solución de extender la invitación a la encuesta a “cualquier mujer”, tan sólo por alcanzar un cupo, oculta un supuesto persistente: creer que Sarlo o Svampa, por caso, opinarían “como mujeres”. Nadie procura, en cambio, observar un cupo masculino para garantizar la representación porque se supone, sin mayor cuestionamiento, que los hombres opinan desde la “generalidad”, lo “universal”, lo no marcado por el género. Es así como, paradójicamente, la lógica progresista podría reforzar la esencialización, ya que las mujeres estarían presentes pero “como mujeres”. Y en esa identidad está toda la promesa y toda la trampa; los feminismos llevan décadas abriendo ese cuestionamiento incómodo.

Revisado el uso más ingenuo del cupo, una estrategia (a lo Beauvoir) dictaría bregar por la inclusión efectiva de las mujeres en ese campo preciado. Otra estrategia (más deconstructiva) invita a repensar la pregunta —¿por qué suponemos que las mujeres deberían estar necesariamente presentes?— y reflexionar, al mismo tiempo, sobre los términos que ofrece la inclusión.

En el campo político e intelectual, la reflexión sobre la política y la exposición pública alcanzan altos niveles de valoración. Se pone en juego un capital simbólico que tiende a ubicar el nombre propio más cerca del intelectual, y más lejos del becario, el docente o el militante. A su vez, una intervención escrita en primera persona con firma estampada al final y en cierta competencia con otras respuestas (tal como proponía la encuesta) es altamente valorada. Mientras que prácticas menos visibles aunque fundamentales como las tareas organizativas de un grupo, o de la revista que lo expresa, por ejemplo, obtienen un reconocimiento muy bajo o inexistente. Allí también hay una ausencia a interrogar: la de los varones. Su menor participación en las actividades más “administrativas” de la política y la tarea intelectual es de fácil comprobación en algunas experiencias grupales. Muchas veces, la inclusión de las mujeres en ciertos espacios tiende a reforzar ese tipo de lógicas en lugar de discutir las y evidenciar los supuestos que le otorgan dominio sobre otras prácticas de la tarea intelectual. En esta perspectiva, ¿la ausencia de mujeres en la encuesta es solamente negativa o es señal de que hay algo más para pensar en los modos de intervención político-académicos?

La respuesta de una de las candidatas a la encuesta nos da más pistas. Ella declinó la invitación diciendo algo así como “la pregunta me excede”. Su respuesta no resulta inesperada en una mujer, habilitada a reconocer debilidad en algún aspecto sin mayores problemas, pero



¿cuántos varones pueden reconocerse superados y animarse a presentar su propia debilidad como excusa? Su lugar en el campo depende de la demostración permanente de su capacidad de respuesta y de su condición de proveedores (de argumentos, de razones, de ideas originales); descansar en la ingenuidad, el despiste o el desconocimiento es una jugada demasiado costosa para ellos. Parece una obviedad, pero todavía hay que explicitar que el género es una dimensión fundamental de la identidad masculina. En este sentido, los varones cuando responden a la encuesta lo hacen también e ineludiblemente como varones. Por supuesto, no nos estamos refiriendo a entidades biológicas determinadas, sino a socializaciones, *habitus* o procesos de subjetivación siempre producidos en el entramado del género.

Los modos hegemónicos de intervención en este campo orientan la respuesta de los invitados pero, también, las decisiones del grupo convocante. El colectivo editor actuó en función de un supuesto revisable al momento de ensayar una lista de participantes: no contamos como posibles participantes a las feministas. Aunque muchas de ellas están explícitamente vinculadas a partidos o grupos de izquierdas, actuamos como si sus principales preocupaciones, la sexualidad y el género, no fueran pertinentes al opinar sobre algo "más general" (peronismo y cultura de izquierdas). Sin darnos cuenta, clasificamos como algo particular la relación de la política, lo sexual y la identidad de género. ¿No hay allí toda una concepción de la política? ¿Y de la izquierda? Una presunción que, por otra parte, también impera en algunos sectores del movimiento de mujeres y los colectivos socio-sexuales, ya que mucha/os de sus referentes han profundizado líneas de trabajo muy específicas y, por diversas razones, mantienen una inestable o débil vinculación con otros espacios del campo político e intelectual.

En realidad la pregunta sin respuesta de aquella tarde nos obliga a interrogar la política de las identidades. Llevado a sus extremos lógicos, el falso progresismo de la suma y la inclusión exigiría redoblar la apuesta: ¿por qué no hay representantes de los denominados pueblos originarios en la encuesta o por qué no hay una persona trans? Y no son preguntas menores ni para la izquierda ni para el peronismo. Ambas vienen atendiendo al menos algún llamado de la diversidad, sin embargo, a las izquierdas se les impone un desafío que esté a la altura de su tradición. Para comenzar, evitar la trampa de una democracia liberal que sólo suma diferencias y denunciar los límites evidentes de la suma como operación política. Es cierto que el particularismo de la identidad también conlleva sus dificultades. Pero el camino no es desechar la pregunta por la identidad y convocar un fantasma de universalidad ya raído, sino afrontar-la para decir, desde la izquierda, que la identidad no es naturaleza sino naturalización, que la consecución de derechos no es un punto de llegada sino de partida, que la suma de diferencias no hace a la democracia liberal menos fallida, que la construcción de un nuevo orden nos convoca como subjetividades sexuadas y corpóreas, que el discurso de la tolerancia es auto-complaciente, que la sexualidad merece una revolución y no sólo un DNI, etc.

Para estar a la altura de ese desafío es imperioso retomar el diálogo siempre fructífero, siempre equívoco de las izquierdas y los feminismos. Allí hay una promesa todavía radical: sumarse a los espacios retaceados (el lenguaje, la academia, la política, las encuestas) sí, pero para provocar el estallido de sus definiciones y la reinención de sus coordenadas.